



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
A CORUÑA**

SENTENCIA: 00147/2014

PONENTE: D. JULIO CESAR DIAZ CASALES.

RECURSO NÚMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 329/2010.

RECURRENTE: CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIG).

ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSELLERIA DE TRABAJO E BENESTAR.

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la

**NOTIFICADO 10/03/14
SENTENCIA**

Ilmos./as. Sres./as. D./D^a

**FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.
JULIO CESAR DIAZ CASALES
JOSE RAMON CHAVES GARCIA**

A CORUÑA, cinco de marzo de dos mil catorce.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el número PO. 329/2010, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIG), representada por el Procurador D. JOSE AMENEDO MARTINEZ, dirigida por la letrada DÑA. ALBA ARRIZADO MOSQUEIRA, contra la resolución 1/2/2010 de la Dirección Xeral Formación e Colocación, sobre no concesión a CIG de las acciones de apoyo y de acompañamiento a la formación. Es parte la Administración demandada CONSELLERIA DE TRABAJO E BENESTAR, representada y dirigida por LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. JULIO CESAR DIAZ CASALES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que "se declare la nulidad de la resolución impugnada o, subsidiariamente, su anulabilidad de acuerdo con lo expuesto en el apartado de FD de este escrito, así como a reconocer el derecho de la CIG a obtener las ayudas peticionadas para financiar las acciones de apoyo y de acompañamiento a la formación denegada por la Consellería de Trabajo e Benestar".



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.

TERCERO.- Habiéndose recibido el asunto a prueba y practicada ésta según obra en autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo la de indeterminada.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso-administrativo viene constituido por la Resolución de 1 de febrero de 2.010 de la Directora General de Formación y Colocación por la se decidió no conceder a la recurrente, CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIGA), las siguientes acciones de apoyo y de acompañamiento a:

- Elaboración de las guías y materiales didácticos que va a utilizar el profesorado y el alumnado en la impartición de la formación del certificado de profesionalidad para el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas (R.D. 1967/2008)
- Elaboración de una correlación entre la formación profesional y las ocupaciones SISPE relacionadas con las familias profesionales del CNCP de sanidad, química y seguridad y ambiente.
- Elaboración de las guías y materiales didácticos que va a utilizar el profesorado y el alumnado en la impartición del certificado de profesionalidad de mecanizado de la madera y derivados (R.D. 1968/2008).
- Elaboración y experimentación de productos, técnicas y/o herramientas para mejorar los sistemas organizativos y de gestión para la formación para el empleo.

La entidad demandante, después de referir en la demanda las 4 propuestas que presentó y las cantidades que solicitó por cada una de ellas y señalar que en la reunión de la Comisión Gallega de Formación celebrada el 23 de diciembre de 2009 la Directora General hizo entrega de la relación de entidades que habían resultado beneficiadas, fundamenta el recurso en los siguientes motivos: a) Ausencia de motivación de la resolución administrativa; b) violación del procedimiento legalmente establecido; c) falta de causa de la resolución desestimatoria; y d) vulneración del principio de igualdad y no discriminación.

El sindicato recurrente señala que con arreglo a la convocatoria la Comisión Gallega de Formación Profesional y



Continua habría de informar sobre las solicitudes en base a la puntuación realizada por la Comisión de Valoración, indicando que ni ésta suministró a aquélla valoración alguna ni la Comisión Gallega informó favorablemente, como se hace constar en la certificación obrante en el expediente (folio 452) sino que en la reunión de 23 de diciembre de 2009 lo que se acordó fue revisar todos los expedientes y que fueran objeto de puntuación todas las solicitudes que se ajusten a la Orden, dándose por informada de la valoración realizada por la Comisión con la disconformidad de las organizaciones sindicales (aportó copia con la demanda del acta de la reunión de la Comisión Gallega de Formación Profesional y Continua). Además señala que se vulneró el procedimiento en la medida en la que resulta del expediente que la reunión de la Comisión Gallega fue anterior en 5 días a la reunión de la Comisión de Valoración al realizarse ésta el día 28/12/2009 (así resulta del folio 453 del expediente).

Alega además que la Comisión de Valoración dejó sin puntuar todas las solicitudes presentadas por el sindicato recurrente, limitándose a la puntuación de las que resultaron seleccionadas, lo que le genera indefensión, porque no puede ejercitar su derecho a la impugnación en base a una evaluación desconocida e inexistente.

Por lo que hace a la vulneración del principio de igualdad y no discriminación denuncia que desde la Xunta de Galicia se mantiene al sindicato nacionalista y a su fundación FORGA al margen del acceso a las ayudas por cuestiones ideológicas y sindicales. Fundamenta esa afirmación en la St. de esta Sala de 31 de octubre de 2012 recaída en el Recurso 137/2010 (cuya copia aportó con la demanda) por la que se condenó a la Xunta por discriminar a FORGA en la distribución de las ayudas en 2009 y en atención a que pese al incremento de los fondos destinados a actividades formativas en el año 2009 el sindicato nacionalista y su fundación vio mermadas en un 20,72% por lo que hace a los programas de fomento del empleo y en un 63,88% en los destinados a acciones complementarias, en el programa de planes de empleo en un 73,85%; en los programas específicos en un 100% y en un 7,02 por lo que se refiere a los Contratos Programa. Lo que, a juicio del recurrente, contrasta con el mantenimiento de los fondos a otras opciones formativas vinculadas a la patronal u otros sindicatos. Lo que motivó la interposición de varios recursos contencioso-administrativos.

En atención a lo expuesto la entidad sindical recurrente termina suplicando que se dicte sentencia por la que, con estimación del recurso, se declare la nulidad de la resolución impugnada y, subsidiariamente, su anulabilidad, reconociendo el derecho de la recurrente a obtener las ayudas interesadas para financiar las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación denegadas por la Consellería.

SEGUNDO.- Por la Xunta de Galicia se contestó la demanda oponiéndose a la misma, indicando que en la resolución recurrida se contiene una remisión expresa a la propuesta de la Comisión de Valoración, prevista en el Art. 8.6 de la Orden de la Convocatoria y a los criterios señalados en el Art. 9,



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

además de hacer referencia al resto de las solicitudes como a las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso señala que de considerar este órgano jurisdiccional que la decisión adoptada no está suficientemente motivada se acuerde la retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno para que se pueda expresar con más detalle la motivación de la resolución, que fue la decisión adoptada por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en la St. recaída en el Recurso 880/2010 de la Sección Primera y en Recurso 4078/2012 de la Sección Segunda, en recursos sustancialmente idénticos, sin que en ninguno de ellos se le reconociera a la demandante el derecho sobre la ayudas concedidas, sino a una resolución debidamente motivada.

En atención a lo expuesto termina suplicando que se dicte sentencia por la que se desestimen la totalidad de los pedimentos de la demanda y se confirme la resolución recurrida en los extremos debatidos.

TERCERO.- Comenzando por los dos primeros motivos del recurso, relativos a la vulneración del procedimiento legalmente establecido y la falta de motivación de la resolución recurrida, hemos de comenzar por transcribir lo que en cuanto a procedimiento dispone el Art. 8 de la Orden de la Convocatoria, para compararlo con lo que resulta del expediente en relación con la tramitación seguida.

Con arreglo a lo dispuesto en el referido artículo de la Orden de 13 de noviembre de 2009 (DOGA 17/11):

"...1. Recibidas as solicitudes a comisión de valoración estudiaraas e cualificaraas, e, unha vez analiza- da a documentación achegada polas entidades soli- citantes, emitirá informe sobre os expedientes apli- cando os criterios de valoración establecidos nesta orde.

2. A Dirección Xeral de Formación e Colocación poderá solicitar de entidades independentes a reali- zación de informes técnicos previos que contribúan á mellora da baremación das solicitudes, sen que os informes resulten vinculantes para a comisión de valoración.

3. Unha vez baremados os expedientes pola comi- sión de valoración, a Comisión Galega de Formación Profesional Continua emitirá informe sobre eles".

De lo anterior resulta claramente que la calificación de las solicitudes por la Comisión de Valoración debía ser previa al informe que habría de emitir la Comisión Galega de Formación Profesional Continua.

Pues bien del expediente resulta justamente que no se respetó el procedimiento, al resultar previa la reunión de la Comisión Galega de Formación Profesional a la calificación de las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración. Pero además, si esto no resultara lo suficientemente grave, resulta que además en el expediente se contraviene, a través de una certificación, el contenido que resulta del acta de la Comisión Galega de Formación Continuada. Nos explicamos.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Al folio 453 del expediente se contiene un acta de la Comisión de Valoración de la que resulta que la reunión para la el estudio y valoración de las propuestas se celebró en Santiago de Compostela el día 28 de diciembre de 2008. Y en el folio inmediatamente anterior, esto es, el 452 se contiene una certificación firmada por la Secretaria de la Comisión Galega de Formación Profesional Continuada que da fe de que la reunión de la misma se celebró el día 23 de diciembre de 2009, por lo que siendo esta reunión anterior a la de la Comisión de Valoración ha de concluirse que se invirtió el orden de las reuniones por lo no pudieron tener la finalidad que les asigna la convocatoria, lo que determina que se omitió de modo flagrante el procedimiento generando una nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 62.1 letra e) de la LPAC.

Por otra parte además de lo anterior -que denunciado en la demanda no mereció ninguna alegación por parte del Letrado de la Xunta en su contestación- resulta que la certificación de la Secretaria de la Comisión Gallega de Formación Profesional Continuada, obrante al folio 452, no se atiene al contenido de lo acordado en el seno de la reunión porque si de la misma resulta que se habría informado favorablemente a las acciones de apoyo y de acompañamiento a la formación, del contenido del acta, aportada con la demanda por parte del sindicato recurrente, resulta que lejos de informarse favorablemente a una propuesta de una Comisión de Valoración - que no podría existir porque, recuérdese que la reunión de ésta fue 5 días después- se acordó revisar todos los expedientes. Pues bien, esta copia del acta fue aportada por la entidad recurrente con su demanda y resulta que la demandada no hizo siquiera mención a esta cuestión en su contestación a la demanda.

CUARTO.- Aunque la solución alcanzada harían innecesarias mayores consideraciones para resolver la principal de las cuestiones planteadas, relativas a la declaración de nulidad absoluta de la resolución recurrida, la documental presentada por el Sindicato recurrente junto con su demanda y su escrito de conclusiones exigen que, al menos, se refieran las mismas, habida cuenta de que también se denuncia una suerte de discriminación del sindicato recurrente a la hora de conceder las subvenciones de las actividades de formación.

En relación con esta cuestión conviene comenzar por advertir que, al igual que ocurrió con la alteración del procedimiento que resultaba de las fechas en las que se celebraron las reuniones de la Comisión Gallega de Formación Profesional Continuada y la Comisión de Valoración, tampoco la alegada discriminación y las precedentes sentencias de este Tribunal, merecieron alegación alguna por parte de la Xunta ni en su demanda ni en el escrito de conclusiones, resultando significativo que el Letrado de la Xunta se limite e reiterar las contestaciones de los recursos e interesar que la sentencia, en caso de estimar la demanda, se limite a ordenar la retroacción para dar oportunidad de dictar una resolución motivada.

Del contenido de las alegaciones de la demanda y de la documental aportada resultan los siguientes antecedentes:



1.- Por la entidad Fundación para Orientación Profesional, Empleo e Formación en Galicia (en adelante FORGA) se promovió el Recurso 137/2010 contra la Resolución de 14 de diciembre de 2009, por la que se acordó no conceder a la recurrente los cursos de formación profesional para el empleo solicitados al amparo de la Orden de 11 de diciembre de 2008, el recurso culminó con la St. 1214/2012 de 31 de octubre en la que, además de apreciar un defecto de motivación en la resolución por no señalar el precepto que impide a los solicitantes interesar subvenciones por las dos vías prevista en la orden, se consideró vulnerado el principio de no discriminación sin ofrecimiento de explicación objetiva y razonable, lo que nos condujo a reconocer en la sentencia el derecho de entidad recurrente a la obtención de las ayudas peticionadas por la vía de la programación del Art. 14.2 de la Orden.

Esta sentencia ya fue objeto de los autos de ejecución de 11 de marzo y 7 de junio de 2013.

2.- También por FORGA se promovió el Procedimiento Ordinario 330/2010 que se sigue ante esta misma Sección contra el Acuerdo de 1 de febrero de 2010 por la que se resolvió no conceder a la entidad recurrente las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. Del contenido del escrito de contestación a la demanda, aportada con la demanda, resulta que los motivos de oposición son coincidentes a los esgrimidos en el presente recurso.

3.- Por la misma entidad FORGA se promovió el Recurso 880/2010 contra el Acuerdo de 21 de septiembre de 2010 de la Dirección Xeral por la que se acordó conceder una sola de las acciones formativas y experimentales solicitadas. Este recurso culminó con la St. 56/2013 de 23 de enero, por la que se estimó parcialmente el recurso por falta de motivación.

En ejecución de la referida sentencia la Xunta de Galicia dictó la resolución de 15 de marzo de 2013 contra la que la entidad recurrente promovió un nuevo recurso contencioso-administrativo el día 22 de mayo de 2013. (Así resulta de las copias aportadas con el escrito de conclusiones).

4.- Por el sindicato CIGA se interpuso recurso contencioso contra la Orden de 22 de marzo de 2011 por el que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de actividades formativas para personas trabajadoras ocupadas, tramitándose con el número 565/2011 ante esta misma sección y que culminó con la St. 718/2013 de veintitrés de octubre, por la que se estimó la demanda al apreciar un vicio de motivación al excluir a los sindicatos de la posibilidad de ser beneficiarios de las subvenciones.

5.- También por FORGA se promovió el Recurso 4078/2012 ante la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la Resolución de 25 de noviembre de 2011 por la que se no se concedieron los cursos de formación profesional para el empleo interesados. El recurso culminó con la St. 237/2013 de veintisiete de marzo, por la que, con estimación del recurso ordenando a la administración el dictado de una nueva resolución motivada.

Cumplida la Sentencia mediante el dictado de una nueva resolución fechada el 29 de julio de 2013 la recurrente promovió un nuevo recurso contra la misma el día 30 de octubre de 2013.

De los anteriores precedentes resulta evidente que la administración viene reiterando resoluciones denegatorias de las subvenciones interesadas por el sindicato recurrente, o su fundación vinculada, y que una vez anuladas lo que hace es cumplir la exigencia de motivación impuestas en las sentencias avocando al recurrente a la promoción de nuevos recursos. Lo anterior genera un círculo pernicioso que a nada conduce, al margen de a la proliferación de contenciosos, pero esta Sala no puede desconocer que no le corresponde otorgar directamente lo denegado por la administración predeterminando el contenido de lo que ha de resolverse en ejecución de sentencia (Art. 71.2 de la LRJCA) salvo que, como ocurrió en el Recurso 137/2010 se aprecie además de un defecto de motivación la vulneración del principio de igualdad. Pero en el presente caso, a diferencia de lo que ocurrió en aquél, no se acreditó que las actividades denegadas a la CIGA fueran concedidas a otra entidad análoga, por lo que se impone limitar el pronunciamiento a la anulación de la resolución y a la retroacción del procedimiento, porque carece de sentido de que alcanzada la conclusión de que se vulneró el procedimiento por preceder la reunión de la Comisión Gallega de Formación Continuada a la Comisión de Evaluación y su preceptivo informe, por esta Sala se dictara Sentencia concediendo las ayudas como omisión de cualquier trámite.

Sin perjuicio de lo anterior, a modo de poner un límite a la perversión administrativa de la reproducción de resoluciones análogas a las recurridas, se exige que, con respeto escrupuloso al procedimiento, se profundice en la valoración de las solicitudes y la motivación de las propuestas y resoluciones que en ejecución de sentencia se lleguen a dictar.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido, con carácter general, en el artículo 139 de la LRJCA vigente al tiempo de la interposición del recurso, en primera instancia se impondrán las costas a la parte que sostuviere la acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad, por lo que en el presente caso procede imponérselas a la administración demandada ya que reitera comportamientos ya anulados en anteriores convocatorias en relación con solicitudes análogas, no trató siquiera de justificar las graves alteraciones del procedimiento cometidas en el curso del expediente y finalmente, como se dijo, trato de dar apariencia de cumplimiento a unos trámites bien omitidos bien alterados en su contenido.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación

FALLAMOS: Que debemos **ESTIMAR Y ESTIMAMOS** el recurso interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. JOSÉ AMENEDO MARTÍNEZ, actuando en nombre y representación de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, contra la Resolución de 1

de febrero de 2.010 de la Directora General de Formación y Colocación por las se decidió no conceder a la recurrente, **ANULANDO LA MISMA** por omisión del procedimiento legalmente establecido, sin hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese a las partes y entréguese copia al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es firme, y que contra ella las personas y entidades a que se refiere el art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer el recurso de casación en interés de Ley del artículo citado, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación. Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0329-10-24), el depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JULIO CESAR DIAZ CASALES, al estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, cinco de marzo de dos mil catorce.